

# Universidad de Huánuco

## Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO  
Y CIENCIAS POLÍTICAS



### **TESIS**

LA FALTA DEL JUICIO DE MÍNIMA IMPUTACIÓN DEL  
FISCAL SUPERIOR AL ORDENAR LA FORMALIZACIÓN  
DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, VULNERA EL  
DERECHO A LA DEFENSA, EN LAS FISCALÍAS PENALES  
DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO, 2018.

**Para optar el Título Profesional de  
ABOGADO**

**TESISTA**

Domínguez Maíz, Yesica

**ASESOR**

Dr. PONCE E INGUNZA, Félix

Huánuco – Perú  
2018



**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**  
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



**RESOLUCIÓN N° 1094-2018-DFD-UDH**  
Huánuco, 24 de diciembre de 2018.

Visto la Resolución N° 065-2018-DCATP-UDH de fecha 13 de junio de 2018 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado "LA FALTA DE JUICIO DE MÍNIMA IMPUTACIÓN DEL FISCAL SUPERIOR AL ORDENAR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA, EN LAS FISCALÍAS PENALES DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO, 2018", presentado por la Bachiller "Yesica DOMINGUEZ MAIZ";

**CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 14° numeral 1 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N°587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante Informe N° 013-2018-UDH/FD-CATP/FPel de fecha 07 de setiembre de 2018, el Dr. Félix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación "LA FALTA DE JUICIO DE MÍNIMA IMPUTACIÓN DEL FISCAL SUPERIOR AL ORDENAR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA, EN LAS FISCALÍAS PENALES DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO, 2018", aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo la Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 466-2016-R-CU-UDH del 23 de mayo de 2016 y la facultad que indique;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- DESIGNAR** al Jurado Calificador para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, doña **Yesica DOMINGUEZ MAIZ**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADA** por la modalidad de Trabajo de Investigación Científica (Tesis), llevado a cabo en el Ciclo de Asesoramiento para la Tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo B. Peralta Baca	: Presidente
Dr. Wilder S. Leandro Hermosilla	: Secretaria
Dr. Hugo O. Vidal Romero	: Vocal



**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**  
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



**RESOLUCIÓN N° 1094-2018-DFD-UDH**  
Huánuco, 24 de diciembre de 2018.

**Artículo Segundo.-** Señalar el día viernes 28 de diciembre de 2018 a horas 8:30 a.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza

**Artículo Tercero.-** Difúndase publicando e invitando a la comunidad académica para que presencian dicha sustentación.

Regístrese, comuníquese y archívese.



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  
DR. FERNANDO CORCINO BARRUETA  
DECANO

**DISTRIBUCIÓN:** Vice. Rect. Académico, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad., f. Exp. Interesado, archivo.  
FCB/znn



**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION  
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Huánuco, siendo las 8.30 horas del día 28 del mes de diciembre, del año dos mil dieciocho se reunieron en el salon de audiencias simuladas - CLOSPERIN 21 los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 1094-2018-DFD -UDH del 24 de diciembre de 2018, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis de la Graduada Yesica DOMINGUEZ MAIZ la postulante al Título de Abogada, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

**JURADOS CALIFICADORES**


**PUNTAJE**


Abg. Hugo B. Peralta Baca	Presidente	<u>16</u>
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla	Secretario	<u>16</u>
Abg. Hugo O. Vidal Romero	Vocal	<u>16</u>

CALIFICATIVO : 16 Dieciseis  
En números En letras

RESULTADO : aprobado por unanimidad

  
Abg. Hugo B. Peralta Baca  
Presidente

  
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla  
Secretario

  
Abg. Hugo O. Vidal Romero  
Vocal

## **DEDICATORIA**

A mi madre, Alejandrina con amor leal y gratitud  
sincera por haberme mostrado  
el camino del éxito.

***La tesista.***

## **AGRADECIMIENTO**

Mis agradecimientos sinceros a:

A Dios por guiar mi camino, a mi familia por el apoyo incondicional y a mis maestros de la Universidad de Huánuco por instruirme a la superación.

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	2
AGRADECIMIENTO .....	3
ÍNDICE .....	4
RESUMEN.....	6
SUMMARY .....	7
INTRODUCCIÓN.....	8

## CAPÍTULO I

### PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	10
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	13
1.2.1. Problema general .....	13
1.2.2. Problemas específicos .....	13
1.3. OBJETIVO GENERAL .....	13
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	14
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .....	15
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.....	15

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
2.2. BASES TEÓRICAS.....	17
2.3.DEFINICIONES CONCEPTUALES.....	41
2.4.HIPÓTESIS.....	43
2.4.1.Hipótesis general.....	43
2.4.2.Hipótesis específicas.....	43
2.5.VARIABLES.....	43
2.5.1.Variable independiente.....	43
2.5.2.Variable dependiente.....	43
2.6.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.....	44

### **CAPÍTULO III**

#### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

3.1.	TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	45
3.1.1.	Enfoque .....	45
3.1.2.	Alcance o nivel .....	45
3.1.3.	Diseño .....	45
3.2.	POBLACIÓN Y MUESTRA .....	46
3.2.1.	Población .....	46
3.2.2.	Muestra .....	46
3.3.	TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	46
3.4.	TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	47

### **CAPÍTULO IV**

#### **RESULTADOS**

4.1.	PROCESAMIENTO DE DATOS.....	48
4.2.	CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	51

### **CAPÍTULO V**

#### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

5.1.	PRESENTAR LA CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	52
5.2.	CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL EN BASE A LA PRUEBA DE HIPÓTESIS.....	55
	CONCLUSIONES .....	56
	RECOMENDACIONES.....	57
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	58
	ANEXOS.....	60



## RESUMEN

El presente trabajo de investigación esquematiza, respecto a la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, la misma que vulnera al derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.

Se advierte en el presente trabajo de investigación que de un total de 10 casos analizados, los 10 han sido ordenados su archivamiento de los actuados por el Fiscal Provincial Penal, la misma que representa el 100% del total. Lo que han generado la QUEJA DE DERECHO de parte de los supuestos agraviados, que han sido declarados fundados en su oportunidad por el FISCAL SUPERIOR PENAL. Asimismo, el estudio indica que de 10 casos estudiados se llegó a determinar que: 06 han sido declarados nulos las disposiciones que archivan el caso, que representa el 60% y 04 casos no han sido declarados nulos, o por lo menos en la disposición no se advierten, lo que representan el 40% del total.

En este orden de ideas de un total de 10 casos que se ha estudiado se llegó a determinar que: 10 han sido ordenados para que el Fiscal Provincial Formalice y Continúe La Investigación Preparatoria, de esta manera devolviéndose los actuados a la fiscalía de origen, la misma que representa el 100%.

Con lo que se puede concluir que a falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco se han vulnerado el derecho a la defensa y se ha afectado la economía procesal de los justiciables.

**PALABRAS CLAVE:** Juicio de mínima imputación, derecho de defensa, debido proceso y formalización de investigación preparatoria.

## SUMMARY

The present research work outlines, with respect to the lack of a trial of minimal imputation on the part of the Superior Prosecutor when ordering a preparatory investigation, which violates the right to defense in the Criminal Prosecutor's Offices of the Province of Huánuco.

It is noted in the present research that of a total of 10 cases analyzed, the 10 have been ordered to file the proceedings by the Provincial Criminal Prosecutor, which represents 100% of the total. What has generated the COMPLAINT OF LAW on the part of the alleged victims, the same that have been declared founded in their opportunity by the PENAL SUPERIOR FISCAL. Likewise, the study indicates that out of 10 cases studied it was determined that: 06 the provisions that file the case have been declared void, that represents 60% and 04 cases have not been declared null, or at least in the provision they are noticed, which represent 40% of the total.

In this order of ideas of a total 10 cases that have been studied it was determined that: 10 have been ordered for the Provincial Prosecutor Formalize And Continue The Preparatory Investigation, thus returning the acts to the prosecutor's office of origin, the same that represents 100%.

With what can be concluded that in the absence of a trial of minimum imputation in the Criminal Prosecutor's Offices of the Province of Huánuco, the right to defense has been violated and the judicial economy of the defendants has been affected.

**KEY WORDS:** Trial of minimum imputation, right of defense, due process and formalization of preparatory investigation.

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación, constituye requisito para obtener el Título Profesional de Abogado en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, básicamente referido a la carencia de un juicio de mínima imputación de parte del Representante del Ministerio Público, al ordenar formalizar investigación preparatoria, en una clara y evidente contravención del derecho a la defensa en las Fiscalías Penales Provincial del Distrito Judicial de Huánuco.

El derecho a la defensa exige no solo que el imputado sea informado de los términos de la imputación formulada en su contra, sino que aquella debe ser precisa clara y expresa, conforme lo reconoce el artículo IX del CPP al referir que la comunicación de la imputación debe ser detallada.

El tema central es imputación mínima conocida también como necesaria, y los medios adecuados para su protección, en el nuevo sistema del proceso penal, básicamente constituye un tema escasamente desarrollado en la doctrina nacional; no obstante la reiterada jurisprudencia con relación al tema del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República, ha puesto en relevancia su importancia, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de los justiciables y el deber de motivación de las resoluciones judiciales por parte del Órgano Jurisdiccional; y también de las disposiciones y requerimientos fiscales.

El centro primordial de atención del proceso penal es la persona humana, por lo que definitivamente no puede ser instrumentalizada en calidad de engranaje dentro del marco de la maquinaria penal, exigiendo de esta manera ineludiblemente la observancia del principio de imputación necesaria.

El objetivo del trabajo de investigación es la de determinar si la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera uno de los derechos constitucionales del derecho a la defensa en las Fiscalías Penales Provinciales de Huánuco, al analizar y determinar las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación.

En tal sentido la investigación realizada, responde a la necesidad de dar solución al problema sobre a la falta de un juicio de mínima imputación por parte del Fiscal Superior al ordenar al Fiscal provincial formalizar investigación preparatoria, restringiendo el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.

Se trata de una investigación de naturaleza sustantiva, porque está destinada y orientada a resolver problemas sobre hechos, con el propósito de dar respuesta objetiva a las interrogantes que se plantean, en un determinado espacio de la realidad y del conocimiento.

Finalmente, postulamos algunas alternativas de solución la misma que consiste en la debida motivación y la correcta construcción de la teoría del caso, y a través de ello evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.

# CAPÍTULO I

## PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

### 1.1. Descripción del problema

Con fecha 29 de julio de 2004 y por Decreto Legislativo N° 957, se promulgó el Nuevo Código Procesal Penal en adelante NCPP, el cual en su Primera Disposición Final declaró un periodo de *vacatio legis*, y estableció para tal efecto el carácter progresivo del proceso para su implementación en los distritos judiciales del territorio nacional, conforme a un calendario oficial. De tal manera que el 01 julio del 2006 el NCPP en el distrito judicial de Huaura entró en vigencia, para después el 1 de abril de 2007 entrar en vigencia en el distrito judicial de la Libertad y así sucesivamente el 01 de julio de 2012, entró en vigencia en nuestro distrito judicial de Huánuco.

Nuestro Código Procesal Penal parte de una etapa de investigación preliminar, la cual es de suma importancia, porque radica en la necesidad estatal para perseguir la conducta delictuosa, de conocer toda denuncia con característica de delito con la finalidad de verificar su contenido y verosimilitud; de conocer las primeras declaraciones; de recoger los elementos probatorios; entre otros y decidir seguidamente si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación preparatoria. Tal como prevé el ordenamiento contenido en el artículo 334 del CPP inciso 1 *“El representante del Ministerio Público al calificar la denuncia penal o después de haber ordenado realizar o dispuesto diligencias preliminares, considera pues que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarar que no procede*

*formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo*”. Es decir, en el modelo procesal, quien tiene la función persecutora del delito es el Ministerio Público, esta función implica que debe investigar, acusar y probar su imputación en juicio oral público, sujeto a la contradicción de la parte investigada.

“En el trabajo del fiscal investigador, adherido al (ya no tan nuevo) Código Procesal Penal de 2004, entre sus tantas funciones, se tiene que está a cargo de la etapa preliminar de la investigación preparatoria. Ahora bien, no existe mayor dificultad en comprender su convicción si este la finaliza formalizando la investigación preparatoria para seguir el proceso, en cambio, se han presentado diversos problemas al momento de hacer efectiva su falta de convicción en el caso determinado.

He aquí el dilema cuando decide archivar la investigación, que luego de recurrida desciende de lo alto, en la forma de una disposición del fiscal superior que le revoca la disposición de archivo y le manda seguir investigando, se anula completamente esa convicción adoptada. Si bien ello es parte de la función superior y se encuentra sacramentado en lo que dicta la norma procesal, es necesario revisar con detenimiento la disposición superior, en cuanto esta podría contener mandatos inconsecuentes para los fines propios de la investigación”. (FLORES E. S., 2009).

Señala también sobre la autonomía fiscal establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que la independencia como lineamiento de la actuación de cada uno de los fiscales. Sin embargo, así como brinda el camino para la independencia, al mismo tiempo declara una línea dura como dependencia en su misma actuación. En tal caso, ya no es

posible una verdadera independencia si se tiene como atadura la sujeción de los inferiores en rango a sus superiores, con una verticalidad de tipo similar a la castrense (...)"

"En tanto para, pretender consensuar en un concepto aceptable lo que implica la autonomía fiscal, sin adentrarnos en la explicación formal, podemos definirla como el conjunto de facultades que tiene el fiscal para ejercer su función sin intromisiones, como operador originario de los casos dentro de su competencia, respetando su criterio hasta el límite de los derechos fundamentales<sup>1</sup>.

Si el Fiscal Provincial, no tiene indicios reveladores en la investigación, desde luego procede su archivamiento, explicando sus razones; ante dicha decisión, la parte denunciante interpone Recurso de Elevación de Actuados, a fin de que la instancia superior lo examine. La instancia superior posterior al examen decide confirmar u ordenar su formalización.

Considero un tema muy delicado que el fiscal superior al ordenar su formalización muchas veces no desarrolla una motivación fundada de cuáles son los indicios reveladores de la materialidad del delito, que al final de cuenta significa vulneración a la mínima imputación. Precisamente la presente investigación tiene el propósito de realizar un diagnóstico de tal proceder, pues no solamente se está vulnerando la mínima imputación, sino, el debido proceso, el derecho a la defensa y al derecho de prueba, que se da en la Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco.

---

<sup>1</sup> Ibidem.

## **1.2. Formulación del problema**

### **1.2.1. Problema general**

¿En qué medida la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018?

### **1.2.2. Problemas específicos**

- a. ¿Cuáles son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018?
- b. ¿Cuáles son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018?

## **1.3. Objetivo general**

Determinar si la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

## **1.4. Objetivos específicos**

- a. Describir las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.



- b. Proponer alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

### **1.5. Justificación de la investigación**

Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, en nuestro Distrito Fiscal se ha dado casos, en que los fiscales superiores al conocer un caso vía Recurso de Elevación de Actuados, cuando el Fiscal Provincial dispuso el archivo de los actuados, luego de revisar el caso disponen que el Fiscal Provincial formalice la investigación preparatoria.

En las disposiciones del Fiscal Superior no se indica de manera concreta, cuales son los indicios o elementos de convicción que sustentan su decisión, así como, tampoco plantean una mínima imputación en contra de la parte investigada, limitándose a enunciar el artículo 334.5 del Código Procesal Penal, que le faculta disponer que el fiscal provincial formalice la investigación preparatoria, vulnerando además el principio de motivación de las resoluciones.

Así tenemos que, las disposiciones emitidas por los fiscales superiores penales vulneran el debido proceso en el ámbito de la mínima imputación, que a su vez, genera indefensión para el imputado, ya que su derecho de defensa se ve afectado, al no existir una mínima imputación sobre la cual debe de defenderse, ya que el Fiscal Provincial merced al principio de jerarquía que rige el Ministerio Público, simplemente obedece la orden impartida por el superior.

La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema ha puesto de relieve su importancia en garantizar el derecho de defensa y el deber de motivación de las resoluciones judiciales; así como, de las disposiciones y requerimientos fiscales.

#### **1.6. Limitaciones de la investigación**

La limitación principal de la presente investigación es que no se contó con disponibilidad de tiempo de los operadores del Ministerio Público, debido a sus recargas laborales a efectos de absolver las interrogantes, para ejecutar la investigación en vista que los Fiscales Superiores que laboran en el Ministerio Público mostraron su disponibilidad en prestar los legajos de disposiciones 2018, con la que su pudo trabajar para su análisis en la presente investigación.

#### **1.7. Viabilidad de la investigación**

La presente investigación fue viable, porque se contó con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para su viabilidad de acuerdo al cronograma y presupuesto establecido.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. Antecedentes de la investigación**

Se ha efectuado la búsqueda de trabajos de investigación existentes en las bibliotecas tanto en la universidad de Huánuco y Universidad Hermilio Valdizan de Huánuco, donde no se ha encontrado tesis de investigación relativos al tema a investigar; tampoco a nivel internacional; pero, se ha encontrado una tesis a nivel nacional, que tiene cierta relación con el trabajo de investigación que pretendo realizar, a continuación, paso a mencionar lo siguiente:

##### **2.1.1 A nivel internacional**

No se registra trabajos de investigación que tenga relación con el presente tema de estudio.

##### **2.1.2. A nivel nacional**

(FIGUEROA DE LA CRUZ, 2015). En la tesis: **“EL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN NECESARIA Y EL CONTROL DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO”**, concluye:

- “Que la Garantía de la Imputación Penal Concreta, de imputación necesaria, imputación concreta o principio de imputación suficiente, viene a constituir una garantía de naturaleza procesal penal con rango Constitucional, ligado al principio de legalidad y el derecho

de defensa del procesado, que el Representante del Ministerio Público debe respetar muy cautelosamente”.

- La imputación viene a constituir uno de los requisitos básicos para con objeto de dirigir la investigación a nivel fiscal. El objeto del Proceso está definido por la imputación y el objeto del debate por la oposición.
- La imputación que efectúe el Ministerio Público con mayor estudio no solo en casos complejos, sino en todos, debe realizarlo analizando los hechos concomitantes constituidos por proposiciones fácticas, vinculándolas con las proposiciones jurídicas útiles y conducentes orientando a conseguir lo propuesto en su teoría del caso y no acumular elementos fácticos por cantidades enormes, sin revisar su vinculación con las proposiciones jurídicas”.

### **2.1.3. A nivel local**

No se registran trabajos de investigación que tengan relación con el presente tema de estudio.

## **2.2. Bases teóricas**

### **2.2.1 Estado constitucional de derecho**

Según, (LEONARDINI D. C., 2009), “(...) En un Estado de derecho constitucional, como se observa al incorporar ciertas garantías de aseguramiento de la Constitución y reconocer la naturaleza del carácter de norma jurídica de esta y su fuerza vinculante, no solo se acoge el

principio de legalidad o primacía de la Ley, sino que se perfecciona con el principio de supremacía de la norma Constitucional, sobre la Ley o principio de constitucionalidad, entendido como la existencia, plena vigencia y respecto al orden constitucional, a partir de ello las normas quedaron relegadas al texto constitucional, así como todos los actos de los particulares, de los Órganos del Estado, contraviniendo inconstitucionalmente y consecuentemente nulos los que no se adecuan a ella.

La supremacía de la Constitución Política del Estado con relación a la Ley se sustenta, conforme a la doctrina adoptada por Kelsen, y actualmente incuestionablemente admitida por un gran sector de doctrinarios, en que el orden jurídico es un sistema jerárquico que, iniciándose en la Constitución se extiende por los sucesivos momentos en el proceso de su creación a través de la Ley, el reglamento, el acto administrativo, la sentencia y la ejecución (...).

En ese mismo sentido, J. María Elena Guerra Cerrón, citando el fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 3741-2004-PA/TC señala "(...) Así, se produjo un cambio cualitativo en el Estado de Derecho y se impuso el Estado Constitucional de Derecho, en el que se proclaman valores para la protección integral y efectiva de los derechos fundamentales, las libertades individuales y políticas consagradas en las constituciones de los Estados.

Del mismo modo, Guerra Cerrón, señala que el "Estado Constitucional de Derecho debería ser suficiente hablar de Estado de Derecho como

marco axiológico, garantía de libertad, de estabilidad, y seguridad jurídicas; sin embargo, la Historia demostró que éste se llegó a convertir en un concepto puramente organizativo y procedimental. “Se verifica así una instrumentalización de esta categoría que pierde una vista de las raíces históricas del concepto, cuya razón de ser se asentada en la protección y efectiva realización de los derechos fundamentales”.

En este marco, a decir de Víctor García Toma: “la consolidación de la jurisdicción constitucional dentro de los sistemas jurídicos políticos implicará la culminación del proceso de desarrollo del Estado de Derecho. Este periodo se gesta a lo largo de todo el siglo XX. Dicho proceso conllevará a que el principio de legalidad, al que ya se encontraba sujeto el Estado desde los inicios del constitucionalismo moderno, supraordinado por el principio de constitucionalidad.

Así, se produjo un cambio cualitativo en el Estado de Derecho y se impuso el Estado Constitucional de Derecho, en el que se proclaman valores para la protección integral y efectiva de los derechos fundamentales, las libertades individuales y políticas consagradas en las constituciones de los Estados.

Ciertamente, la “incidencia de los derechos fundamentales en el Estado constitucional implica por otra parte, un redimensionamiento del antiguo principio de legalidad en sede administrativa forjado en el siglo XIX en una etapa propia del Estado liberal. Si en el pasado la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales se realizaban en el ámbito de la ley, y en el Estado constitucional, la legitimidad de las leyes se analiza en función de su conformidad, con la Constitución Política del

Estado y los derechos fundamentales contenidas y reconocidas en ella. Por ello, es pertinente señalar que el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la constitución a la ley, es decir, de realizar el control difuso *-dimensión objetiva-*, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal en los tribunales administrativos *-dimensión subjetiva-*”.

Lo que se busca es dar efectividad al texto constitucional ya que actualmente “no es materia de debate o controversia que la Constitución sea considerada como la norma jurídica suprema, jurisdiccionalmente aplicable, y que garantice la limitación del poder para asegurar que este, en cuanto se deriva del pueblo, no se imponga inevitablemente sobre la condición libre de los propios ciudadanos y derechos fundamentales capaz de vincular a todo poder público, a los particulares y a la sociedad en su conjunto.

A raíz de este imperio de la Constitución es que se presenta con fuerza el fenómeno de la constitucionalización de los derechos”. (Maria Elena, 2017).

#### **2.2.1.1. Características del Estado Constitucional de Derecho**

El mismo Cabrera Leonardini, identifica las siguientes características más restantes del Estado Constitucional de Derecho, a saber: (LEONARDINI, 2009)

**a) La primacía de la constitución sobre la ley.**

En el Estado Constitucional de Derecho, la constitución asume la supremacía dentro del ordenamiento jurídico; es decir, todo el orden jurídico deriva de la constitución y queda legitimada por su concordancia directa o indirecta con la constitución.

**b) La obediencia a la constitución de la totalidad de los poderes públicos y de los particulares.**

Es propio de un Estado Constitucional de Derecho, en la que todos los poderes públicos específicamente los poderes legislativos, el ejecutivo y el judicial se encuentren sujetos a la Constitución, es decir, actúan dentro de los parámetros previstos por la Constitución sin inmiscuirse en la esfera de la autodeterminación de las personas y de la autorregulación de la sociedad, asimismo dentro de los límites de las competencias específicas que le señala la Carta Magna a cada uno de ellos frente a las competencias atribuidas a los demás ordenes constitucionales.

Pero la subordinación a la Carta Magna no solamente alcanza a las entidades públicas, sino que se hacen extensivas a los particulares, quienes en su facultad autorreguladora tienen la obligación de someterse a las normas



constitucionales y en su calidad de ciudadanos debe obligatoriamente preferir y defender la Constitución.

**c) La real eficacia de los derechos fundamentales.**

En un Estado Constitucional de Derecho, la eficacia de los derechos fundamentales tiene una proyección mediata en tanto que con su reconocimiento y protección no sólo se trata de garantizar el respeto de parte de los poderes públicos sino también de los propios particulares, orientado a su funcionamiento máximo, esto es, de conseguir su plenitud, por lo que la acción de los poderes públicos ha de estar orientada a hacerla posible.

En este sentido, la obligación de someterse a la Constitución de todos los poderes del Estado, no solamente se deduce la obligación del Estado de no lesionar y vulnerar la esfera individual o institucional amparada por los derechos fundamentales, sino también, la obligación de contribuir a la efectividad y respeto de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión de naturaleza subjetiva por parte del ciudadano.

**d) La división de Poderes.**

A diferencia en un Estado de Derecho donde en el pasado se efectuaba la distinción clásica entre los poderes

legislativo, ejecutivo y judicial, en cambio en el Estado Constitucional de Derecho, la denominada separación de poderes se da dentro de una relación distinta.

Pues, no se permite a ningún poder la facultad de tomar decisiones absolutas, ya que la viabilidad de las mismas van a desprender de su correlación con la Constitución, es decir, los Poderes del Estado e incluso de los particulares sean persona jurídicas y naturales, deben ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, siendo el Tribunal Constitucional quien tiene la misión jurídica de mantener y defender administrando justicia la constitucionalidad al resolver los conflictos que surjan entre los poderes Constitucionales del Estado.

**e) La existencia de una jurisdicción constitucional.**

En un Estado Constitucional de Derecho, al considerarse la Constitución una norma material cualitativamente superior y recurrible ante los Órganos Jurisdiccionales, en ese sentido la estabilidad del régimen requiere de una serie de normas y preceptos de control para asegurar, que tanto los poderes públicos del Estado, como los actos de los particulares se mantengan dentro del marco Constitucional, imposibilitando todas las posibles violaciones, en ese orden serán válidos únicamente lo fielmente coherente con la Constitución.

Una forma de controlar la vulneración de los derechos constitucionales, es a través de la jurisdicción especializada en materia constitucional, la misma que se encuentra representada por el Tribunal Constitucional que tiene la capacidad de decidir la constitucionalidad o no de ciertos actos del Estado como de los particulares, con ellos se puede inferir que el Estado Constitucional de Derecho sólo será tal, en caso se evidencia un conjunto de mecanismo de control de constitucionalidad, entre ellos principalmente una jurisdicción especializada en materia de derecho constitucional, en cargada de resolver los conflictos que se presenten entre una norma jerárquicamente inferior con la Constitución Política del Estado, o los actos de los gobernantes así como de gobernados que vulneren derechos reconocidos por la Carta Magna, haciendo de esta forma el derecho constitucional en un verdadero y eficaz derecho y no simplemente en un postulado de principios políticos o de buenas intenciones.

#### **2.2.2. Derecho penal en el estado constitucional**

Como bien señala, José Antonio Caro John, *“La penetración de los valores constitucionales en el procedimiento de operación de Derecho Penal pone en evidencia la hetero referencialidad de este ordenamiento normativo en el proceso de comunicación con los demás subsistemas jurídicos (...), quiere decir que el control constitucional de la operación*

*penal es un examen de legitimación, en virtud de lo cual aclara si la subsunción típica de una conducta dentro del supuesto de hecho de la norma penal responde a una interpretación conforme a la Constitución”.*

(CARO JOHN, 2014)

Por lo tanto, que como la función de la Constitución no consiste en regular propiamente el comportamiento de las personas, decidiendo qué conductas superan o no el riesgo permitido con todo, operación exclusiva del Derecho Penal-, su función se circunscribe más bien a regular el ejercicio del poder punitivo del Estado.

### **2.2.3. Debido proceso**

Según el Tribunal Constitucional, el debido proceso puede definirse constitucionalmente de la siguiente manera: “El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el derecho”. (Sentencia, 2003)

Para el Tribunal Constitucional el debido proceso, definitivamente incluye todas las normas contenidas de la Constitución de forma y de fondo aplicable, así como las principales leyes y disposiciones de la legislación jerárquicamente inferior que contribuyen a garantizar la aplicación y el respeto de los derechos constitucionales. Pues en ese sentido ello no es un concepto restrictivo sino extensivo.

El Tribunal Constitucional en su diversa jurisprudencia reiterada considera que el debido proceso forma parte indisolublemente del derecho a la tutela jurisdiccional, sobre todo, al derecho de toda

persona al acceso a la justicia y a la ejecución y efectividad de las resoluciones judiciales. Lo señaló en la siguiente sentencia: “(...) *el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales*”. (Sentencia, 2002).

#### **2.2.3.1. El debido proceso legal (formal y material) y proceso penal**

El debido proceso y el derecho fundamental a tenerlo se encuentran positivizados tanto en el ámbito de normas de derecho internacional público, en sede constitucional, como en la legislación interna de derecho penal formal y resulta consecuencia como indica García Morillo de la reserva al Estado del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Lo cierto es que si el Estado pretende reservarse el derecho de emplear la fuerza contra sus ciudadanos, como una acción de última ratio, sin embargo debe al menos crear las condiciones para que estos actúen dentro de los márgenes mínimos de libertad.

El debido proceso como garantía constitucional en todo proceso, puede conceptualizarse como: “*un derecho complejo que entraña un conjunto de garantías constitucionales*”. Esta definición del debido proceso tiene empatía con las propuestas conceptuales propuestas por la doctrina del Tribunal Constitucional que alude al respecto como: “*derecho genérico hacia cuyo interior se individualizan diversas*

*manifestaciones objetivamente reconocidas en la constitución”. (2001)*

#### **2.2.3.2. Características**

“(…) El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, en todas las pretensiones contenido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, forma parte del *“modelo constitucional del proceso”*, que deben ser respetadas como garantías mínimas para que el proceso pueda considerarse como debido (…)

#### **2.2.3.3. El derecho a la debida motivación**

“(…) Como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en su diversa jurisprudencia que el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales exige que exista lo siguiente:

**a)** La fundamentación jurídica que no solo implica la mención de las normas aplicables al caso concreto, sino la explicación y justificación y las razones de por qué el caso se encuentra dentro de los supuestos que contemplan tales normas invocadas;

**b)** La congruencia entre lo pedido y lo resuelto, es decir que debe resolverse de acuerdo a lo peticionado, la cual implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las

pretensiones formuladas por las partes; y asimismo reclama. En otras palabras el Órgano Jurisdiccional no puede resolver Ultra y/o extra petita.

**c)** Que lo resuelto por sí misma exprese suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”. (Cfr. Exp. N° 4348-2005-PA/TC). (CARO JOHN, 2014)

“(…) el debido proceso es el derecho de toda persona de obtener de los órganos jurisdiccionales una resolución razonada, motivada y congruente con las pretensiones deducidas oportunamente, es decir dentro del plazo de ley, por las partes en cualquier clase y forma de procesos. Pues la exigencia de que las decisiones judiciales deben ser motivadas en virtud del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución, garantiza que los administradores de justicia, cualquiera sea la instancia a la que pertenecen, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una determinada controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga teniendo en cuenta sobre todo a la Constitución y a las Leyes; es más también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.

La Cara Magna definitivamente no garantiza una determinada y forma de extensión de la motivación de las resoluciones, por

lo que su contenido esencial se respeta ello se encuentre fundamentada jurídicamente, es decir debe ser congruente entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, ello exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, no obstante ser breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

Asimismo no garantiza que de manera que todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto pormenorizado de un pronunciamiento de manera expresa y detallada. En el proceso penal, el derecho al debido proceso garantiza que la decisión adoptada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable y consciente de los hechos del caso, de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado por el juez guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que corresponde resolver”. (Cfr. Exp. N° 1230-2002-HC/TC)”. (CARO JOHN, 2014).

“Dentro de los procesos penales que finalizan con autos de sobreseimiento o con sentencias absolutorias, la ausencia de motivación suficiente respecto a la pretensión civil incoada por la parte agraviada debidamente constituida en actor o, en su defecto, por el Ministerio Público, resulta bastante recurrente. Este fenómeno por más improbable que parezca, se puede advertir también en las propias sentencias condenatorias en las que el hecho punible se acredita y, por tanto, se impone



una pena que, por mandato legal sustantivo, debe determinarse conjuntamente con una reparación civil.

En ambos supuestos se advierte la falta de motivación suficientemente respecto a las razones por las que se debe amparar o desestimar la pretensión civil”.  
(PORTOCARRERO, 2015)

#### **2.2.4. Derecho de defensa en el proceso penal**

Luis Miguel, señala que, “el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones son las herramientas con las que cuenta el imputado y su defensa no solo para hacer frente a las pretensiones del órgano acusador sino para las alegaciones que formulara para refutar los cargos que plantee el Ministerio Público. En esta línea, resulta fundamental el derecho a probar en la medida que no solo permite la construcción de la propia teoría del caso, sino que habilita el control de la actividad probatoria desarrollada con el afán de acreditar la responsabilidad del imputado”. (Luis Miguel, El proceso penal acusatorio, 2015)

#### **2.2.5. La mínima imputación**

##### **2.2.5.1. El derecho a la imputación Necesaria**

“El derecho a la defensa exige no solo que el imputado sea informado de los términos de la imputación formulada en su contra, sino que aquella debe ser precisa clara y expresa, conforme lo reconoce ya el artículo IX del CPP al referir que

la comunicación de la imputación debe ser detallada. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la imputación penal debe contener “una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan” (Cfr. Exp. N° 8125-2005-PHC/TC, caso Jeffrey Immelt y otros, Lima).

La idea de la imputación necesaria requiere elementos fácticos, lingüísticos y normativos.

Los elementos *fácticos* de la imputación suponen que aquella debe comprender una narración de las circunstancias del hecho punible imputado al procesado que permita observar los componentes del tipo penal tanto en su aspecto objetivo como en su aspecto subjetivo. Así, en relación al tipo objetivo, debe precisarse el título de imputación atribuido (de autor o de partícipe), la acción (u omisión típica), el resultado típico y la imputación al tipo objetivo, con mención del tiempo, lugar y modo en que aquellos elementos convergen. En relación al tipo subjetivo debe precisarse si el hecho resulta imputable a título de dolo o a título de culpa haciendo referencia –también- a los elementos de tiempo, lugar y modo que permiten aseverar la concurrencia tanto del dolo como de la culpa.

Los elementos *lingüísticos* de la imputación son los que permiten que el imputado comprenda e identifique cual es el

hecho que le atribuye el Ministerio Público. Esto implica que el lenguaje utilizado al formularse la imputación debe ser claro e inteligible. La exigencia de la utilización de un lenguaje comprensible en la formulación de la imputación se observa en el Sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al caso “Margarita Toledo” (Exp. 3390-2005-HC/TC): “es derecho de todo proceso el que conozca de manera expresa, cierta e inequívoca los cargos que se formulan en su contra”

Finalmente, los elementos *normativos* suponen una suerte de subsunción de los elementos fácticos, expresados –por cierto- recurriendo a elementos lingüísticos, con las normas jurídicas aplicables. En ese contexto, resultan relevantes algunos supuestos específicos que trataré de pasar revista. (...) la garantía de la imputación necesaria exige precisar los elementos de juicio que sustenta cada una de las imputaciones formuladas contra la persona con mención de su relevancia de cara a establecer la responsabilidad penal del imputado. No basta con una mera glosa de los indicios o elementos de juicio existentes, sino que debe precisar su incidencia probatoria, conforme ha precisado ya el Tribunal Constitucional en el caso “Jiménez Sardón” (Exp. 5325-2006-PHC/TC), donde reconoce que el derecho a la imputación necesaria exige –a nivel del auto ampliatorio de procesamiento penal- que contenga “en la motivación una

descripción suficientemente detallada de los hechos nuevos considerados punibles que se imputan y *de material probatorio o de los indicios que justifican tal decisión. En el presente caso se advierte que la imputación penal materia del auto ampliatorio cuestionado adolece de falta de conexión entre los hechos que configuran las conductas ilícitas penales atribuidas al beneficiario y las pruebas que se aportan como sustento de cargos*". (Luis Miguel, 2012)

#### **2.2.5.2. Alcances sobre Imputación Necesaria o Imputación Concreta**

Dentro de los alcances sobre la imputación sea concreta o necesaria los medios empleados para su protección en el nuevo sistema procesal penal definitivamente constituyen uno de los temas desarrollados mínimamente por en la doctrina nacional; no obstante, la reiterada jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República han puesto de conocimiento su importancia con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y la debida motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias; igualmente por el Ministerio Público, al emitir las disposiciones y requerimientos por los fiscales.

Constitucionalmente la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y como tal es el centro primordial de atención del proceso penal, por lo que siendo

así, se encuentra prohibida ser instrumentalizada como un engranaje de la maquinaria penal, lo que exige la ineludible observancia de las exigencias del principio de imputación necesaria. (MONGE GUILLERGUA, s.f.)

La imputación debe entenderse en sentido material o lato como la atribución fundada, a una persona de un acto presuntamente punible, sin ser necesario de una acusación contra ella como consecuencia de la investigación; es decir, la imputación define precisamente en determinar cuáles son los hechos que se le atribuye a una persona haber cometido, conforme a los tipos penales contenidos en el Código Penal. La imputación, es la atribución de un hecho punible fundado en el *factum* respectivo, así como en la *legis atinente* y sostenido en la prueba concomitante, presupuestos que deben inescrupulosamente ser verificados y compulsados por el Juez que ejerciendo la facultad de control y garante debe exigir que la labor desplegada por el fiscal sea cabal y verosímil, que la presentación de los cargos sea concreta y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables; pero ello en modo alguno significa tolerar una *seudocausa* probable genérica, gaseosa o carente de fundamento probatorio y jurídico que no prosperará en la eta intermedia del proceso.

#### **2.2.6. Formalización y continuación de la investigación**

Una vez concluido el plazo para la realización de las diligencias preliminares, ya sea en sede fiscal o policial, si el representante del Ministerio Público considera que se dan los elementos tanto objetivos, como subjetivos, procederá con dictar disposición, formalizando y continuando con la investigación preparatoria, el mismo que debe comunicar al Juez de la Investigación Preparatoria, quien expedirá resolución resolviendo recepcionar la comunicación de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el imputado. Siendo así, el Fiscal, tendrá que realizar una labor más eficiente y dentro de los plazos establecidos en la ley, pues será su persona y no la Policía quien establezca y determine los hechos materia de investigación y la tipificación correspondiente del delito.

En la tipificación del delito el Fiscal no solo debe de limitarse con señalar en que tipo penal contenido en la norma se encuadra la conducta del imputado y el hecho delictivo, sino que además deberá de indicar cuáles han sido la motivación que lo han llevado a calificar el hecho como un determinado delito, es decir debe establecer que el hecho es ilícito, por la concurrencia de los elementos normativos y descriptivos del tipo penal, con las proposiciones fácticas y jurídicas de dicha conclusión.

Con la investigación preparatoria se busca la recopilación de los elementos de convicción necesarios para sustentar fehacientemente la acusación en el Juicio Oral, asimismo se puede prescindir de dicha etapa investigadora y proceder a formular directamente su acusación,

en razón a que en las diligencias preliminares se recopiló toda la información y elementos de prueba suficientes como para sustentar la acusación del Ministerio Público. Es decir que solo de la investigación preliminar el Fiscal, se encuentra totalmente convencido de la comisión del delito y de la responsabilidad del autor, con suficientes elementos de prueba, no requiere que el plazo de la investigación preparatoria culmine para formular acusación, pues en ese sentido la norma es flexible y sobre todo porque ello implica la abreviación de las diligencias y tiempo en el proceso a seguir, del cual se encuentra establecido en el artículo 336° del Nuevo Código Procesal Penal, incoando acusación directa.

#### **2.2.6.1. Finalidad de la investigación preparatoria**

De conformidad con lo establecido por el inciso 1° del artículo 321 del Nuevo Código Procesal Penal, la investigación preparatoria tiene como finalidad reunir todos los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no requerimiento de acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa, solicitando sobreseimiento del proceso mediante la observación sustancial de la acusación y también formales de la misma.

Al respecto, es preciso aclarar, tal como señala Montero Aroca, que la finalidad de la investigación no es preparar sólo la acusación sino que la actividad preliminar debe servir tanto para lo que determine la inculpación como para lo que la

excluye , es decir, debe servir para preparar tanto la acusación como la defensa.

Y, si bien el NCPP ha regulado en este sentido la finalidad de la investigación, existe aún a una norma que sería contraria a la finalidad descrita por el legislador, nos referimos a la acusación directa. Esta contradicción se manifiesta al analizar el Art. 336° inciso 4 del NCPP, que posibilita al Ministerio Público formular directamente acusación cuando considera que las actuaciones realizadas en las diligencias preliminares han recopilado la suficiencia de la existencia de la comisión de un delito. Es decir, que no cabe la justificación del acusado la posibilidad de alegar que su defensa aún no está preparada para oponerse a la acusación solicitando sobreseimiento, dado a que en el procedimiento preliminar, no se han practicado las diligencias tendientes a averiguar lo que le favorece, a fin de desvirtuar su responsabilidad.

El legislador, en este supuesto, limita la finalidad de la investigación preparatoria a “preparar solo la acusación”, olvidando que las actuaciones del Ministerio Público se rigen por el principio de objetividad; es decir, que el fiscal investiga “los hechos constitutivos del delito, los que determinen la participación culpable y los que acrediten la inocencia del



imputado”. En conclusión, el fiscal no sólo está obligado a indagar aquellos hechos relacionados con su propia estrategia de investigación, sino también los solicitados por el imputado y su abogado defensor con el objetivo de excluir su responsabilidad penal”. (FLORES, 2010).

#### **2.2.6.2. Dirección de la Investigación preparatoria**

Con relación a ello en el Código de Procedimientos Penales de 1940, la dirección de la investigación se encontraba exclusivamente a merced del Juez, quien era un juez instructor o de investigación, sin embargo ello cambia radicalmente con el Nuevo Código Procesal Penal, pues el director de la investigación recae en el representante del Ministerio Público, siendo la función del Juez la de ser un tercero entre las partes para controlar la constitucionalidad de la actividad de la investigación, es decir como Juez de Garantía.

Los actos de investigación y su respectiva regulación dependen de cada código procesal penal y del sistema que adopte cada uno, lo que a su vez tiene que ser acorde con los principios recogidos por su correspondiente Constitución. Así el NCPP y su correspondiente sistema acusatorio, han colocado en manos del Ministerio Público la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal. Este papel protagónico

del Ministerio Público concuerda sin duda alguna con la idea de un proceso contradictorio, imparcial con igualdad de armas, acorde con el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú que atribuye al Fiscal la conducción de la investigación desde su inicio; garantizando de esta forma una separación de funciones y la vigencia del principio acusatorio, respetuoso del debido proceso y el derecho defensa.

Ahora bien, es importante tener en claro que, la dirección de la investigación, ahora en manos del Ministerio Público y ya no en el Juez de Instrucción, no se trata de un mero cambio de actores, tal como lo señala Mendaña, debemos tener en claro que los fiscales no pueden hacer lo mismo que antes hacían los jueces, son que deben investigar de manera distinta, pues la transformación del modelo debe implicar además de la sustitución de actores, un cambio en la concepción en la investigación (...) (FLORES, 2010).

#### **2.2.6.3. Conclusión de la investigación preparatoria**

“La finalidad básica de la investigación preparatoria es la de incorporar los suficientes elementos de prueba necesarios para conocer la verdad de los hechos objetivamente y construir la verdad procesal, por ello, no es necesario que el fiscal, espere se cumpla el plazo máximo establecido para la investigación o el tiempo señalado por este, a fin de proceder

con la conclusión y en virtud de ello proceder a formular requerimiento acusatorio, ya que dadas las circunstancias y si a juicio del Fiscal, la Policía ha reunido los elementos probatorios suficientes que sustente no solo su acusación para la etapa intermedia, sino también el debate probatorio en el juicio oral, por lo que siendo así dará por concluida la aludida etapa procesal.

Es preciso mencionar que todos los elementos de prueba reunidos en la investigación preparatoria, no tiene aún el valor suficiente para su acreditación como pruebas, pues esta última adquiere recién dicha calidad mediante el debate público y oral, y a la valoración judicial. En la etapa de investigación lo que se realiza es la recolección de los elementos que servirán para probar la imputación en el juicio, por ello deviene su nombre, investigación preparatorio. Esto no ocurre con el vetusto Código de Procedimientos Penales de 1940, en donde los elementos reunidos en la investigación se convertían automáticamente en prueba, sin la necesidad de que éstos sean producidos directamente en el juicio oral, dictándose muchas veces sentencias inconstitucionales, máxime si en muchos casos la única prueba para sostener la acusación, es y era el atestado policial". (Jorge Luis RIVERA CADILLO, 2012)

#### **2.2.6.4. Efectos de la Formalización de la Investigación**

- a.** Suspende el curso de la prescripción de la acción penal.
- b.** El Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.

### **2.3. Definiciones conceptuales**

#### **a. Juicio de mínima imputación**

El profesor, Cáceres Julca, sostiene que la “imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar o negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados, amplíen, excluyan o aminoren la significancia penal” (CACERES JULCA, 2008).

Es necesario precisar que la imputación necesaria tiene un contenido implícito de la garantía con rango constitucional del debido proceso, que en todos los ordenamientos procesales se consideran como su manifestación explícita: el derecho de los imputados de “*conocer los cargos*”, en su contra.

#### **b. Formalización de la investigación preparatoria**

Según el tratadista Rivera, con relación a la formalización de la investigación preparatoria señala: “Culminado el plazo para la realización de las diligencias preliminares, esto es veinte días o más, el fiscal, si considera que se dan los elementos tanto objetivos, como subjetivos, procederá con dictar disposición formalizando y continuando la investigación, el mismo que debe ser comunicado al Juez de la

Investigación Preparatoria quien deberá recepcionar la misma emitiendo resolución correspondiente”. (Jorge Luis RIVERA CADILLO M. A., 2012)

Esta etapa inicial regula en la Sección I. artículo 321-343 del CPP, tiene una finalidad genérica, de reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y en su caso, al imputado preparar su defensa (artículo 321.1 del CPP).

**c. Derecho de defensa**

Este derecho está reconocido constitucionalmente en el artículo 139 inciso 14 el cual señala que: son principios y derechos de la función jurisdiccional *“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”*.

**d. El debido proceso**

El debido proceso se conceptualiza básicamente como un principio legal por el cual el Estado a través de los Órganos Jurisdiccionales competentes debe respetar todos los derechos legales reconocidos a una persona por la ley. El debido proceso también es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, orientados a asegurar un proceso justo con un resultado

equitativo, y a permitirle la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez.

## **2.4. Hipótesis**

### **2.4.1. Hipótesis general**

La falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

### **2.4.2. Hipótesis específicas**

- a. La vulneración al derecho a la defensa y la afectación a la economía procesal son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.
- b. La debida motivación y la correcta construcción de la teoría del caso son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

## **2.5. Variables**

### **2.5.1. Variable independiente**

La falta de un juicio de mínima imputación.

### **2.5.2. Variable dependiente**

Vulneración al derecho de defensa.

## 2.6. Operacionalización de las variables (dimensiones e indicadores)

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>I.-</b> La falta de un juicio de mínima imputación.	Disposiciones	-.Relevancia hechos de imputación
		-. Norma jurídica a probar
<b>D.-</b> Vulneración de Derecho a la defensa	Derecho de defensa material	-.Deficiencia a los hechos imputados
	Derecho de defensa técnica	-.Ineficiencia de adecuación al tipo penal.
	Derecho a probar	-.Retracción al ofrecimiento de prueba

## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **3.1. Tipo de investigación**

El tipo de investigación es sustantiva, se orienta a resolver problemas facticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del conocimiento.

##### **3.1.1. Enfoque**

La presente investigación es básica porque, se apoyó en fuentes de carácter documental, esto es, carpetas fiscales que contienen los actuados de las investigaciones preliminares.

##### **3.1.2. Alcance o nivel**

La presente investigación estuvo enmarcada dentro del nivel de investigación explicativa.

##### **3.1.3. Diseño**

El diseño fue no experimental, porque no existió manipulación de variables (Ramón Ramírez), en su forma transversal ya que la unidad de análisis es observada en una sola unidad de tiempo y son usadas en investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo para el análisis de interacción de las variables en un tipo específico (Ramón Ramírez)

M ----- O



M = Muestra

O = Observación

### **3.2. Población y muestra**

#### **3.2.1. Población**

La población de estudio estuvo constituida por 20 carpetas fiscales de las Fiscalías Penales Corporativas de Huánuco, 2018.

#### **3.2.2. Muestra**

El estudio fue de tipo no probabilística en su variante intencional, es decir, estuvo a criterio del investigador y lo constituyeron 10 carpetas fiscales de las Fiscalías Penales Corporativas de Huánuco, 2018.

### **3.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos**

Las técnicas con sus respectivos instrumentos utilizados en la presente investigación fueron:

#### **3.3.1. Análisis de contenido documentales**

Ello debido que a través de un análisis crítico del contenido de cada uno de las carpetas fiscales en trámite, se pudo observar las disposiciones del fiscal superior que ordena formalizar la investigación preparatoria al fiscal provincial en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018 y como instrumento se utilizó la ficha de análisis.

### **3.3.2. La observación**

Con esta técnica se pretendió observar las carpetas fiscales, directamente las disposiciones emitidas por el fiscal superior que ordena formalizar la investigación preparatoria al fiscal provincial en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018 y como instrumento se empleó la guía de observación.

### **3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.**

Para el procesamiento de la información, se aplicó la estadística básica a través de las tablas estadísticas y para el análisis de la información se empleó la técnica de la hermenéutica y como instrumentos, las fichas de análisis e interpretación.

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS

#### 4.1. Procesamiento de datos

Los resultados se indican en cuadros, según la información de las Carpetas Fiscales y el análisis correspondiente realizados para finalizar con la prueba de hipótesis.

#### MATRIZ DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES

TABLA N° 01

N° DE CARPETA FISCAL	DELITO	DISPOSICION DEL FISCAL PROVINCIAL PENAL	DISPOSICION DEL FISCAL SUPERIOR PENAL 2018							
			FUNDADO		NULA		FORMALIZAR		DEVOLUCION	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
20060- 4501-2016-509-0	Lesiones Culposas Agravadas	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	x		x		x		x	
2006014504-2015-176-0	Usurpación	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		x		x		X	
2005014503-2018-32-0	Usurpación y Otro.	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		x		x		X	
1464-2017	Usurpación Agravada	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		-	-	x		X	
2006014501-2015-1112-0	Falsedad Ideológica	Ordenó el archivo definitivo de los actuados.	X		x		x		X	
2006014505-2017-975-0	Violación Sexual	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		-	-	x		X	
2006014504-2014-1493-0	Usurpación agravada	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		x		x		X	
2006014501-2016-859-0	Usurpación de Funciones y Otro.	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		-	-	x		X	
2006014501-2017-589-0	Lesiones Culposas Agravadas	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		x		x		X	
98-2017-MP-4°FSP	Usurpación-Turbación de la Posesión	Dispuso no formalizar investigación preparatoria	X		-	-	x		X	

Fuente: Elaboración propia mediante observación del Legajo de Disposiciones Superiores

### **Análisis e interpretación:**

Del presente cuadro se puede advertir lo siguiente:

- a)** De un total de 10 casos analizados, los 10 han sido ordenados su archivamiento de los actuados por el Fiscal Provincial Penal, la misma que representa el 100% del total. lo que han generado la QUEJA DE DERECHO de parte de los supuestos agraviados en contra de los presuntos investigados.
- b)** De un total de 10 casos analizados, 10 han sido declarados fundados la queja interpuesta por los presuntos agraviados por el FISCAL SUPERIOR PENAL; es decir la misma que representa el 100% del total.
- c)** De los 10 casos en estudio, 06 han sido declarados nulos las disposiciones que han sido archivados el caso, y que representa el 60% y 04 casos no han sido declarados nulos, o por lo menos en la disposición no se advierten. Lo que representa el 40%.
- d)** De los 10 casos en estudio, 10 han sido ordenados para que el Fiscal Provincial FORMALICE Y CONTINUE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, la misma que representa el 100%.
- e)** De los 10 casos en estudio, 06 han sido declarados nulos las disposiciones que archivan el caso, y que representa el 60% y 04 casos no han sido

declarados nulos, o por lo menos en la disposición no se advierten. Lo que representa el 40%.

- f)** Asimismo, de los 10 casos en análisis, 10 han sido ordenados para que los actuados se devuelvan a la fiscalía de origen para los fines correspondientes. Representando el 100% del total.
- g)** En ese mismo orden de ideas se puede indicar, de los 10 casos en estudio, 06 son por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación, lo que representa el 60% del total, 02 por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Culposas Agravadas que representa el 20%, 01 por el delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica que representa el 10% y finalmente 01 por el delito contra la Libertad en la modalidad Violación de la libertad Sexual la misma que representando el 10%.
- h)** Finalmente se puede concluir que se ha vulnerado al derecho a la defensa y se ha afectado la economía procesal de los justiciables; debido que recién la segunda instancia les dio la razón; generándoles daños y perjuicios por este fenómeno; por la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

#### 4.2. Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis

Contrastación de hipótesis y verificación de variables de la investigación de lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con lo que se ha podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación nos permitió determinar lo siguiente:

Se contrasta la hipótesis general acorde a lo analizado y comparado entre los cuadros presentados en los resultados, llegando a determinar que: La falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

**TABLA N° 02**

<b>TIPO DE HIPOTESIS</b>	<b>HIPOTESIS</b>	<b>PRUEBA DE HIPOTESIS</b>
<b>HE<sub>1</sub></b>	La vulneración al derecho a la defensa y la afectación a la economía procesal son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	VERDADERO
<b>HE<sub>2</sub></b>	La debida motivación y la correcta construcción de la teoría del caso son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	VERDADERO
<b>HG</b>	La falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	VERDADERO

## **CAPÍTULO V**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.1. Presentar la contrastación de los resultados del trabajo de investigación**

##### **- Análisis de Fuente documental**

El primer autor Moge Guillergua, acota que, la imputación mínima o necesaria y los medios para su protección en el nuevo sistema procesal penal constituyen uno de los temas poco desarrollados en la doctrina nacional; sin embargo, la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema ha puesto de relieve su importancia en orden a garantizar el derecho de defensa y el deber de motivación de las resoluciones judiciales; así como, de las disposiciones y requerimientos fiscales.

El mismo autor señala que la persona humana es y debe ser el centro primordial de atención del proceso penal, por lo que no puede ser instrumentalizada como un engranaje de la maquinaria penal, lo que exige la ineludible observancia de las exigencias del principio de imputación necesaria.

La imputación debe entenderse en sentido material o amplio como la atribución, más o menos fundada, a una persona de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como su consecuencia; es decir, la imputación define con toda precisión cuales son los hechos que se le atribuye haber cometido al imputado, conforme a los tipos legales del Código Penal. La imputación, supone la atribución de un hecho punible fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables; pero ello en modo alguno significa tolerar una seudocausa probable genérica, gaseosa o carente de fundamento probatorio y jurídico penal.

A la luz del punto de vista de los autores, se puede desprender que la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, vulnera el derecho a la defensa y al mismo tiempo afecta la economía procesal de las partes del proceso.

### **Marco normativo**

- El Estado constitucional de Derecho, reconoce el carácter de norma jurídica y fuerza vinculante de la Constitución, acogiendo el principio de la Supremacía de la Constitución sobre la Ley o principio de



constitucionalidad, entendido como la existencia, plena, vigencia y respecto al orden constitucional, a partir de ahí las leyes quedaron subordinadas al texto constitucional (...). *“Produciendo un cambio cualitativo en el estado de derecho, y se impuso el estado constitucional de derecho, en el que se proclama valores, para la protección integral y efectiva de los derechos fundamentales, las libertades individuales y políticas consagradas en las constituciones de los estados”.*

- El tribunal constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, forma parte del “modelo constitucional del proceso”, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido (...).
- El derecho a la defensa exige no solo que el imputado sea informado de los términos de la imputación formulada en su contra, sino que aquella debe ser precisa, clara y expresa, conforme lo reconoce ya el artículo IX del CPP al referir que la comunicación de la imputación debe ser detallada.

## **5.2. Contrastación de la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis**

La falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.

Se pudo determinar que la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa; debido a que ningún caso analizado y estudiado líneas arriba ha sido confirmado por el Fiscal Superior; y ésta se puede demostrar con los casos llevados en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.

Del estudio y análisis de la información proporcionada se puede concluir que es necesario e indispensable de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria.

## **CONCLUSIONES**

1. Según los resultados encontrados se concluye que la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.
2. Está comprobado que la vulneración al derecho de defensa y la afectación a la economía procesal son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.
3. Está comprobado que la debida motivación y la correcta construcción de la teoría del caso son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco.

## RECOMENDACIONES

1. Que, los legisladores, evalúen el juicio de mínima imputación de parte de los Fiscales Superiores al ordenar formalizar investigación preparatoria, y de esta manera no se vulnere el derecho a la defensa.
2. Que, los legisladores deben recurrir a otros mecanismos más innovadores para que no se vulnere al derecho a la defensa y no se afecte la economía procesal por la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales.
3. El Estado tiene que promover la capacitación de los operadores jurídicos en la difusión del juicio de mínima imputación para evitar la vulneración del derecho al debido proceso de los procesados.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GUERRA CERRÓN J. María Elena. (2017). *"Intesidad y dimenciones del debido proceso"*. Perú: Gaseta Jurídica.
- CARO JOHN, José Antonio y HUAMAN CASTELLARES Daniel O. (2014) *"El sistema penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional"*. Perú: Editores del Centro.
- NEYRA FLORES, José Antonio. (2012). *"Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral"*. Perú: Moreno S.A.
- RIVERA CADILLO, Jorge Luis, PALOMINO CASERES, Miguel Ángel y CALDERON VALENCIA Jorge Orlando. (2012). *"La investigación material del delito en el Nuevo Código Procesal Penal"*. Perú: Editora y Librería Jurídica Griley E.I.R.L.
- JALARI FLORES, Elivio Sebastian. (2017). *"La Autonomía del fiscal de investigación frente a la voluntad del superior"*. Perú: Gaceta Jurídica S.A.
- BINDER, A. M. (1993). *"Introducción al Derecho Procesal Penal"*. Buenos Aires.
- CÁCERES JULCA, R. (2008). *"Habeas corpus contra el auto apertorio de instruccion"*. Lima: Grijley.
- CASTILLO ALVA, J. L. (2011). *"Manual de Litigacion en Delitos Gubernamentales"*. Lima: Ara Editores.
- DEL OLMO DEL OLMO, J. A. (2004). *"El principio de imputacion necesaria, una primera aproximación."*

- FIGUEROA DE LA CRUZ, I. I. (2015). *"El principio de imputación necesaria y el control de la formalización de la investigación preparatoria en el proceso penal peruano"*. Huaraz - Perú.
- MAIER, J. B. (2000). *"Derecho Procesal Penal Argentino"*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- REYNA ALFARO, L. M. (2012). *"El anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa"*. Lima.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 24 de marzo de 2003 en el Eexp\_0426-2003\_AA\_TC.
- Sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 06 de diciembre de 2002 en el Exp\_1042-2002\_AA\_TC.
- MONGE GUILLERGUA, R. E. (s.f.). "Principio de Imputación necesaria". Obtenido en: <http://dialogoderechoyjurisprudencia.blogspot.com/2012/01>.
- CABRERA LEONARDINI Daniel. En. (<https://fderecho.wordpress.com/2009/10/23/el-estdo-constitucional-de-derecho-y-la-vigencia-de-los-valores-en-el-ordenamiento-juridico/>).

# **ANEXOS**

## MATRIZ DE CONSISTENCIA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

**Investigadora** : Yesica Domínguez Maíz

**Título de investigación** “La falta de un juicio de mínima imputación del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018”.

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
<b>Problema general</b> ¿En qué medida la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018?	<b>Objetivo general</b> Determinar si la falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	<b>Hipótesis general</b> La falta de un juicio de mínima imputación de parte del Fiscal Superior al ordenar formalizar investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	<b>Variable Independiente</b>  .- La falta de un juicio de mínima imputación	.- Disposiciones	.- Relevancia hechos de imputación
					.- Norma jurídica a probar
<b>Problema específico</b> A.- ¿Cuáles son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018? B.- ¿Cuáles son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018?	<b>Objetivo específico</b> A.- Analizar y determinar las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018. B.- Proponer alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.	<b>Hipótesis específico</b> A.- La vulneración al derecho a la defensa y la afectación a la economía procesal son las implicancias de la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018.  B.- La debida motivación y la correcta construcción de la teoría del caso son las alternativas de solución para evitar la falta de un juicio de mínima imputación en las Fiscalías Penales de la provincia de Huánuco, 2018.	<b>Variable Dependiente</b>  .- Vulneración al derecho de defensa	.- Derecho de defensa material	.- Deficiencia a los hechos imputados
				.- Derecho de defensa técnica	.- Ineficiencia de adecuación al tipo penal.
				.- Derecho a probar	.- Retracción al ofrecimiento de prueba



TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
<p><b>Tipo de investigación</b> Es aquella que se orienta a resolver problemas facticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del conocimiento.</p> <p><b>Nivel de investigación</b> La presente investigación está enmarcada dentro del nivel de investigación explicativa.</p>	<p><b>Población</b> La población de estudio estará constituida por 20 carpetas fiscales de las Fiscalías Penales Corporativas de Huánuco, 2018.</p> <p><b>Muestra</b> El estudio será de tipo No Probabilística en su variante intencional, es decir, estará a criterio del investigador y lo constituyen 10 carpetas fiscales de las Fiscalías Penales Corporativas de Huánuco, 2018.</p>	<p><b>Diseño</b> El diseño es no experimental descriptivo. M ----- O  M = Muestra  O = Observación</p>	<p>Las técnicas con sus respectivos instrumentos a utilizar en la presente investigación son:</p> <p><b>Análisis de contenido documentales.</b> Ello debido que a través de un análisis crítico del contenido de cada uno de las carpetas fiscales en trámite, se podrá extraer las disposiciones del fiscal superior que ordena formalizar la investigación preparatoria al fiscal provincial en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018</p> <p><b>La guía de observación.</b> Con esta técnica se pretende observar las carpetas fiscales, directamente con la disposición del fiscal superior que ordena formalizar la investigación preparatoria al fiscal provincial en las Fiscalías Penales de la Provincia de Huánuco, 2018</p>	<p>Para el procesamiento de la información, se aplicará la guía de observación y procedimientos recomendadas por los cuadros estadísticos y para el análisis de la información se empleará la técnica de la hermenéutica y como instrumentos, las fichas de análisis e interpretación.</p>

Cargo

"AÑO DEL DIALOGO Y DE LA RECONCILIACION NACIONAL"

**Sumilla:** Solicito autorización para acceder a disposiciones de las Fiscalías Superiores

Sr. Dr.

**JOHN HENRRY MARTEL TRUJILLO**

**Fiscal Superior**

**Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco**



**YESICA DOMÍNGUEZ MAÍZ** (con grado de bachiller), identificada con DNI N° 48396266, con domicilio real en el Jr. Aguilar N° 192 y Félix Ponce E Ingunza, asesor del proyecto de tesis; con el debido respeto ante usted me presento y digo:


Que, al amparo de lo establecido en el artículo 2 inciso 20 del Constitución, recurrimos a su honorable despacho a fin de solicitarle tenga a bien **autorice a la Bachiller Yesica Domínguez Maíz a tener acceso a las disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco** que usted preside, ello en razón a que viene elaborando el proyecto de tesis para obtener el grado de abogada titulado "LA FALTA DE JUICIO DE MÍNIMA IMPUTACIÓN DEL FISCAL SUPERIOR AL ORDENAR LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA EN LAS FISCALÍAS PENALES DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2018", proyecto de investigación que fue aprobado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco mediante Resolución N° 065-2018-DCATP-UDH, el mismo que adjunto en copia al presente.

Como es de verse, sin su autorización no podrá desarrollar el proyecto de tesis, ya que no podría acceder a la información que conllevará al éxito del proyecto.

**POR LO EXPUESTO:**

Pido a usted acceder a lo solicitado por estar arreglada a ley.

Huánuco, 28 de junio de 2018.

  
**Félix Ponce e Ingunza**  
Magister en Investigación y Docencia Superior  
Doctor en Ciencias de la Educación  
**Félix Ponce e Ingunza**  
Asesor de Tesis

  
**Yesica Domínguez Maíz**  
DNI N° 48396266



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES

Huánuco, 13 de julio del 2018

**CARTA N° 172 -2018-MP-PJFS-DFH**

Señora:

**YESICA DOMÍNGUEZ MAÍZ**

Jr. Aguilar N.º 192 – Huánuco.

Huánuco.-

Ref: Solicitud de autorización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco N° <sup>3237</sup> -2018-MP-PJFS-DFH, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

Reg. 6164-2018  
JHMT/mm

  
**John H. Martel Trujillo**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES  
SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO

Jr. Dos de Mayo N° 1155 – 4° piso  
Telefax 062-511021  
presidenciahuanuco1@gmail.com





**Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores  
del Distrito Fiscal de Huánuco  
N° 3237 -2018-MP-PJFS-DFH**

Huánuco, trece de julio  
Del dos mil dieciocho.-

**DADO CUENTA:**

Con el escrito de fecha 02 de julio de 2018, mediante el cual la persona Yesica Domínguez Maíz solicita se le autorice tener acceso a las disposiciones emitidas por las Fiscalías Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, para el proyecto de tesis titulado "La falta de juicio de mínima imputación del Fiscal Superior al ordenar la formalización de la investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la provincia de Huánuco 2018" a fin de obtener el título de Abogada, y;

**CONSIDERANDO:**

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores es el órgano de mayor jerarquía en el Distrito Fiscal de Huánuco, encargado de ejercer la representación y la gestión del Ministerio Público en su jurisdicción, en concordancia con la política institucional de gobierno, planificando, organizando, dirigiendo y supervisando las actividades de las Fiscalías del Distrito Fiscal, contando con el apoyo de la Administración del Distrito Fiscal, División Médico Legales y una Oficina de Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad, conforme lo establecido en el artículo setenta y siete del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público.

La petición de la persona indicada en el dado cuenta, se enmarca en el acceso a los ambientes del Archivo Central del Distrito Fiscal de Huánuco, a efectos de poder revisar los legajos de disposiciones de las Fiscalías Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, todo ello en mérito al proyecto de tesis denominado "La falta de juicio de mínima imputación del Fiscal Superior al ordenar la formalización de la investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las fiscalías penales de la provincia de Huánuco 2018", a fin de obtener el título de Abogada, por lo que resulta pertinente que se proceda con la autorización para la realización de la revisión de los legajos de disposiciones de las Fiscalías Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, con fines académicos, debiendo ceñirse a la revisión sin tener autorizado la obtención de copias de lo actuados, debiendo para ello el solicitante coordinar con el responsable de la Delegación Administrativa del Distrito Fiscal de Huánuco a fin de que señale fecha y hora en la que se llevará a cabo dicha revisión.

En consecuencia, estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo cinco del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modificada por la Ley 29286 y, literal u) del artículo setenta y siete del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 067-2009;

**SE RESUELVE:**

**Primero:** autorizar que la persona Yesica Domínguez Maíz, identificada con DNI N° 48396266, realice la revisión del legajo de disposiciones de las Fiscalías Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco en el Archivo Central del Distrito Fiscal de Huánuco, debiendo para ello coordinar con el responsable de la Delegación Administrativa del Distrito Fiscal de Huánuco a fin de señalar el día y la hora que se llevará a cabo dicha revisión, quedando terminantemente prohibido extraer copias de dichos legajos.

**Segundo:** comunicar con la presente a la Oficina de administración de la Delegación Administrativa de Huánuco, para su conocimiento y fines pertinentes.

Reg. 6164-2018  
JHMT/mmp

*John H. Martel Trujillo*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALIAES  
TRUJILLO DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES

Huánuco, 01 de agosto del 2018

**CARTA N° 216 -2018-MP-PJFS-DFH**

Señorita:

**YESICA DOMINGUEZ MAIZ**

Jr. Aguilar N° 192 – Huánuco.

- 981321003

**Huánuco.-**

Ref.: Solicitud de autorización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco N° 3614 -2018-MP-PJFS-DFH, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Reg. 7092-2018  
JHMT/mm

  
**John H. Martel Trujillo**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALIAES  
DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO

Jr. Dos de Mayo N° 1155 – 4° piso  
Telefax 062-511021  
presidenciahuanuco1@gmail.com

2





**Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales  
Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco**

**Nº 3614 -2018-MP-PJFS-DFH**

Huánuco, primero de agosto  
Del dos mil dieciocho.-

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

Mediante escrito de fecha dos de julio del dos mil dieciocho, la ciudadana Yesica Domínguez Maiz, solicitó acceso a las disposiciones de las fiscalías Superiores de Huánuco, a fin de que estudie y analice dichas disposiciones para la elaboración de la tesis denominada "La falta de juicio de mínima imputación del Fiscal Superior al ordenar formalización de investigación preparatoria, vulnera el derecho a la defensa en las Fiscalías Penales de la provincia de Huánuco 2018"; siendo así mediante Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco N° 3237-2018.MP-PJFS-DFH, se autorizó la revisión de los legajos de las disposiciones de las Fiscalías Superiores en el archivo central, debiendo coordinar con el responsable de la Delegación Administrativa para que señale fecha y hora para la revisión, quedando prohibido la extracción de copias de dichos legajos.

Siendo ello así, en fecha veintitrés de julio del presente año, la recurrente Yesica Domínguez Maiz presentó un escrito en la que solicita se deje sin efecto la Resolución N° 3237-2018-MP-PJFS-DFH, a fin de que los despachos superiores permitan el acceso a sus legajos de disposiciones para la revisión, selección y extracción de copias de diez (10) disposiciones del año dos mil dieciocho, que se encuentren en giro y custodia de los despachos antes referidos.

Al respecto, se advierte que en mérito al artículo once inciso b) de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"<sup>1</sup>, este despacho se encuentra facultado a autorizar el ingreso de la recurrente a los despachos de las Fiscalías Superiores de Huánuco, a fin de que los Fiscales Superiores faciliten el acceso de dicha ciudadana a los legajos de las disposiciones de los años 2017 y 2018, siendo esta netamente facultad de los Fiscales Superiores, quienes deberán clasificar la información brindada teniendo en cuenta las excepciones al ejercicio del derecho (información confidencial).<sup>2</sup>

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cinco del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modificada por la Ley 29286 y, literal u) del artículo setenta y siete del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público; aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 67-2009-MP-FN.

<sup>1</sup> Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo 11: Procedimiento. - En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante"

<sup>2</sup> Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo 15° B.- 5 La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad persona y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso solo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado"


**SE RESUELVE:**

**Primero: dejar sin efecto,** la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco N° 3237-2018-MP-PJFS-DFH, en todos sus extremos.

**Segundo: autorizar,** el acceso de la ciudadana Yesica Dominguez Maiz, previa coordinación con los Fiscales Superiores, a la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fiscalía Superior Penal de Huánuco, a fin de que dichos Magistrados faciliten el acceso a la información solicitada, teniendo en cuenta las excepciones que la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública faculta.

**Tercero: comunicar** con la presente a los Fiscales Superiores de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fiscalías Superiores Penales de Huánuco y a la recurrente, para su conocimiento y fines.

Reg.7092-2018  
JHMT/mm

  
**John H. Martel Trujillo**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALIA  
SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO



**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO  
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES

Huánuco, 14 de agosto del 2018

**CARTA N.º 212 -2018-MP-PJFS-DFH**

Señorita:

**YESICA DOMINGUEZ MAIZ**

Jr. Aguilar N° 192 – Huánuco.

**Huánuco.-**

Ref.: Solicitud de autorización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite el oficio N.º 241-2018-MP/GI-DF-HCO del Analista Koenig Everardo Tadeo Chávez de la Oficina de Gestión de Indicadores de Huánuco, mediante el cual informa la carga laboral respecto a quejas de derecho de las Fiscalías Superiores de Huánuco, lo que se pone de conocimiento para los fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Reg. 8351-2018  
JHMT/mmif

  
**John H. Martel Trujillo**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALIA  
SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO

Jr. Dos de Mayo N° 1155 – 4° piso  
Telefax 062-511021  
presidenciahuanuco1@gmail.com





**MINISTERIO PÚBLICO**  
**FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE HUANUCO  
GESTIÓN DE INDICADORES

Huánuco, 09 de agosto de 2018

**OFICIO N° 241-2018-MP/GI-DFHCO.**

Señor  
**Dr. JOHN HENRRY MARTEL TRUJILLO**  
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores  
Distrito Fiscal de Huánuco.



Presente;

**Asunto :** Queja de Derecho, requerido por ciudadanas Yesica Domínguez Maíz.

**Referencia :** OFICIO N° 9416-2018-MP-PJFD-DFH.  
SOLICITUD de Yesica Domínguez Maíz

Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle mis saludos cordiales, asimismo hacerle llegar adjunto al presente en 01 folio, el requerimiento efectuado mediante documento de la referencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DISTRITO FISCAL HUANUCO**  
**Koenig Everardo Jado Chávez**  
ANALISTA - GESTIÓN DE INDICADORES

**35 Años**  
*Defendiendo  
la legalidad*

c.c.  
Arch.

(062) 515471- 515634  
Anexos: 3775

Jr. San Martín N° 765 – 6° Piso – Huánuco – Perú  
[www.fiscalia.gob.pe](http://www.fiscalia.gob.pe)

**1° a 4° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUÁNUCO: RESUMEN DE QUEJA DE DERECHO,  
2017 - 2018 (a julio)**

Descripción	2017	2018	Total general
CALIFICACION DE IMPUGNACION		9	9
DENUNCIA PENDIENTE		1	1
DERIVACION DE IMPUGNACION	5	1	6
FUNDADO	292	146	438
FUNDADO EN PARTE	47	9	56
INFUNDADO	351	199	550
PROVIDENCIAS		2	2
<b>Total general</b>	<b>695</b>	<b>367</b>	<b>1062</b>

FUENTE: SGF

**1° a 4° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUÁNUCO: QUEJA DE DERECHO, SEGÚ FISCALÍA  
2017 - 2018 (a julio)**

Descripción	2017	2018	Total general
<b>1° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUANUCO</b>		<b>39</b>	<b>39</b>
FUNDADO		13	13
FUNDADO EN PARTE		3	3
INFUNDADO		23	23
<b>2° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUANUCO</b>	<b>217</b>	<b>113</b>	<b>330</b>
CALIFICACION DE IMPUGNACION		2	2
DERIVACION DE IMPUGNACION	4		4
FUNDADO	118	55	173
FUNDADO EN PARTE	1	1	2
INFUNDADO	94	54	148
PROVIDENCIAS		1	1
<b>3° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUANUCO</b>	<b>252</b>	<b>122</b>	<b>374</b>
CALIFICACION DE IMPUGNACION		1	1
DENUNCIA PENDIENTE		1	1
DERIVACION DE IMPUGNACION		1	1
FUNDADO	103	43	146
FUNDADO EN PARTE	45	5	50
INFUNDADO	104	70	174
PROVIDENCIAS		1	1
<b>4° FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUANUCO</b>	<b>226</b>	<b>93</b>	<b>319</b>
CALIFICACION DE IMPUGNACION		6	6
DERIVACION DE IMPUGNACION	1		1
FUNDADO	71	35	106
FUNDADO EN PARTE	1		1
INFUNDADO	153	52	205
<b>Total general</b>	<b>695</b>	<b>367</b>	<b>1062</b>

FUENTE: SGF